

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

35ª REUNIÓN — 19ª SESIÓN ORDINARIA — 16 DE AGOSTO DE 1995

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF,

del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor GUILLERMO E. SNOPEK,

y del señor presidente de la Comisión de Economía,
doctor FERNANDO DE LA RUA

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO
Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELIN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARANGUELLO, Pedro Carlos
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

CENDOYA, Jorge J.
RUBEO, Luis
VAQUIR, Omar M.

EN COMISION:

SOLANA, Jorge D.
VACA, Eduardo P.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 3456.)
 2. Por invitación del señor vicepresidente de la Nación, el señor senador por Tierra del Fuego don Daniel E. Martínez procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 3456.)
 3. Homenaje a la memoria del quíntuple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio. Se considera un proyecto de declaración por el que se manifiesta pesar por su fallecimiento. (S.-797, 798, 804, 820, 834, 851 y 927/95.) Se aprueba. (Página 3456.)
- I. Asuntos entrados:
- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 3459.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Carlos Francisco Balbín como juez federal de primera instancia (P.E.-423/95). (Pág. 3460.)
 - III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Miguel Ignacio Alegre como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes (P.E.-424/95). (Pág. 3460.)
 - IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita la devolución de su similar, 215/95 (designación del doctor Jorge del Valle Puppo como juez de cámara nacional de apelaciones) (P.E.-439/95). (Pág. 3460.)
 - V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Jorge del Valle Puppo como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (P.E.-440/95). (Pág. 3460.)
 - VI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Josefina Curi como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero (P.E.-441/95). (Pág. 3460.)
 - VII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Alejandro Mario Saravia como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal (P.E.-442/95). (Pág. 3461.)
 - VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Matilde Evangelina Ballerini

como jueza nacional de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal (P.E.-443/95). (Pág. 3461.)

- IX. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el artículo 140 del Régimen de Contrato de Trabajo con respecto al contenido necesario de los recibos de pago (P.E.-420/95). (Pág. 3461.)
- X. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa de Nivel y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico suscrito con Brasil, Paraguay y Uruguay, en Buenos Aires (P.E.-421/95). (Pág. 3461.)
- XI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo suscrito con Bolivia y Paraguay en La Paz, Bolivia (P.E.-422/95). (Pág. 3464.)
- XII. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se observa parcialmente el proyecto de ley de concursos y quiebras (24.522) (P.E.-427/95). (Pág. 3467.)
- XIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (P.E.-428/95). (Pág. 3468.)
- XIV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio sobre edad mínima, 1973, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza (P.E.-429/95). (Pág. 3469.)
- XV. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 3473.)
- XVI. Comunicaciones de comisiones. (Página 3473.)
- XVII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 3473.)
5. Inserciones solicitadas por el señor senador Solari Yrigoyen. Se aprueban. (Pág. 3474.)
6. Asuntos entrados (continuación):
- XVIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3474.)
- XIX. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3474.)
- XX. Peticiones particulares. (Pág. 3476.)
- XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes acerca de la supuesta falta de financiación para el Poder Judicial en

24. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal a la doctora María Oderay I. Longhi (P.E.-391/95). Se aprueba. (Página 3535.)
25. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional de primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal a la doctora Matilde E. Ballerini (P.E.-443/95). Se aprueba. (Pág. 3535.)
26. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Alvaro E. Balestrini (P.E.-369/95). Se aprueba. (Página 3536.)
27. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Héctor J. Scotti (P.E.-392/95). Se aprueba. (Pág. 3536.)
28. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Juan A. Ruiz Díaz (P.E.-409/95). Se aprueba. (Pág. 3536.)
29. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Jorge del Valle Puppo (P.E.-440/95). Se aprueba. (Página 3537.)
30. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal a la doctora Betti A. Cabrera Sarmiento (P.E.-386/95). Se aprueba. (Página 3537.)
31. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal a la doctora María Cruz Juanes Hernández (P.E.-390/95). Se aprueba. (Página 3538.)
32. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal a la doctora Stella Maris Vulcano (P.E.-403/95). Se aprueba. (Pág. 3538.)
33. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal al doctor Juan C. Ciráldez (P.E.-414/95). Se aprueba. (Pág. 3539.)
34. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Menem y otros señores senadores por el que se rechaza el proyecto británico de realizar explotaciones de hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas (S.-921/95). Se aprueba. (Página 3539.)
35. Comienza la consideración sobre tablas del proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez sobre explotación de minerales e hidrocarburos líquidos o gaseosos en el territorio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (S.-929/95). (Pág. 3555.)
36. A moción del señor senador Cafiero se reconsidera el proyecto de resolución que figura en el punto 34 de este Sumario y se aprueba con modificaciones. (Pág. 3556.)
37. Continúa la consideración sobre tablas del proyecto de ley a que se refiere el punto 35 de este Sumario y se aprueba con modificaciones. (Pág. 3556.)
38. A moción del señor senador Solari Yrigoyen se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de declaración del que es autor por el que se proclama ante la comunidad internacional la invalidez de los contratos celebrados por el gobierno colonial de las islas Malvinas (S.-1.013/95). (Pág. 3562.)
39. A moción del señor senador Fadel se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor junto con el señor senador Bordón por el que se aprueba la conformación de una comisión parlamentaria encargada de expresar ante distintos países la posición argentina respecto de la decisión británica sobre el llamado a licitación para la explotación de hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas (S.-1.000/95). (Pág. 3563.)
40. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicita se declaren de interés nacional las Segundas Jornadas Internacionales de Protección Jurídica del Medio Ambiente, en la ciudad de San Juan (S.-993/95). Se aprueba. (Pág. 3563.)
41. Comienza la consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre accidentes de trabajo (C.D.-29 y 35/95). Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. (Pág. 3563.)
42. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3591.)
 - II. Inserciones. (Pág. 3594.)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en consecuencia.

39

DELEGACION PARLAMENTARIA POR EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN MALVINAS

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca, del bloque PAIS.

Sr. Fadel. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente S.-1.000/95, el que ya fue fundamentado oportunamente por el señor senador por Mendoza, mediante el cual se conforma una comisión parlamentaria, que, a nuestro entender, completa la intención de los proyectos ya votados, presentados por el señor senador por La Rioja. Creemos que realmente existe consenso suficiente para tratarlo y aprobarlo en esta oportunidad.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulado por el señor senador por Catamarca.

Se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee el proyecto de resolución que figura en el punto LXXX de los asuntos entrados.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

40

PROTECCION JURIDICA DEL MEDIO AMBIENTE

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicita se declaren de interés nacional las II Jornadas Internacionales de Protección Jurídica del Medio Ambiente, a reali-

zarse entre el 18 y el 20 de septiembre del corriente año en la ciudad de San Juan.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee el proyecto de comunicación que figura en el punto LXXV de los asuntos entrados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Quiero señalar que el proyecto también lo firman los señores senadores Bravo, Cafiero y Sapag.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

41

ACCIDENTES DE TRABAJO

Sr. Presidente. — Corresponde considerar los órdenes del día acordados.

En primer término, el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre accidentes de trabajo. (Orden del Día N° 386.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — *(Lee)*

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley (C. D.-29/95) y (C. D.-35/95), venido en revisión de la Cámara de Diputados, sobre accidentes de trabajo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De conformidad con los términos del artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 18 de julio de 1995.

Julio A. Miranda. — **Juan C. Romero.** —
Oraldo N. Britos. — **Ricardo A. Branda.**
— **Pedro E. Molina.** — **Eduardo Menem.**
— **Julio C. Humada.** — **Eduardo P. Vaca.**
— **Felipe E. Ludueña.**

En disidencia parcial:

Augusto J. M. Alasino. — **Guillermo E. Snopek.**

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación**
(21 de junio de 1995)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Capítulo I

Objetivos y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1º — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias.
2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):

- a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
- b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
- c) Promover la recalificación y la reconvocación de los trabajadores damnificados;
- d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Art. 2º — Ambito de aplicación.

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:

- a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
- c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

2. El Poder Ejecutivo podrá incluir en el ámbito de la LRT a:

- a) Los trabajadores domésticos;
- b) Los trabajadores autónomos;
- c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; y
- d) Los bomberos voluntarios.

Art. 3º — Seguro obligatorio y autoseguro.

1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación:

- a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; y

- b) Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley.

3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)" de su libre elección.

4. El Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán igualmente autoasegurarse.

Capítulo II

De la prevención de los riesgos del trabajo

Art. 4º — Obligaciones de las partes.

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que el empleador deba adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, y fijará los plazos para su ejecución.

El Poder Ejecutivo nacional regulará las pautas y contenidos del plan de mejoramiento, así como el régimen de sanciones.

3. Mientras el empleador se encuentre ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

4. La ART controlará la ejecución del plan de mejoramiento, y está obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de mejoramiento serán resueltas por la SRT.

Art. 5º — Recargo por incumplimientos.

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta millones (\$ 30.000).

2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante.

Capítulo III

Contingencias y situaciones cubiertas

Art. 6º — Contingencias.

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el *itinere* se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional.

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles.

3. Están excluidos de esta ley:

- a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo;
- b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

Art. 7º — Incapacidad Laboral Temporaria.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:

- a) Alta médica;
- b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);
- c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;
- d) Muerte del damnificado.

Art. 8º — Incapacidad Laboral Permanente.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad labora-

tiva permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.

3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo nacional y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.

4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT.

Art. 9º — Carácter provisorio y definitivo de la ILP.

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración.

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo.

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único, tendrá carácter definitivo, a la fecha del cese del periodo de incapacidad temporaria.

Art. 10. — Gran invalidez.

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.

Capítulo IV

Prestaciones dinerarias

Art. 11. — Régimen legal de las prestaciones dinerarias.

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.

2. Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), o permanente provisorio se ajustarán en función de la variación del AMPO definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria.

3. El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan.

Art. 12. — Ingreso base.

1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad

que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado.

2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30,4.

Art. 13. — Prestaciones por Incapacidad Laboral Temporaria.

1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART, la que en todo caso, asumirá las prestaciones en especie.

El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 20.744 (t.o. 1976) para el pago de las remuneraciones a los trabajadores.

2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, abonando asimismo las asignaciones familiares.

3. Durante el período de Incapacidad Laboral Temporaria, originada en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo.

Art. 14. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones:

- a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20 %, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad;

- b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % e inferior al 66 %, una renta periódica —contratada en los términos de esta

ley—, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a las retenciones por aportes previsionales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Art. 15. — Prestaciones por incapacidad permanente total (IPT).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes.

Durante este período, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado.

El damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a los \$ 55.000.

3. Cuando la Incapacidad Permanente Total no deviniere en definitiva, la ART se hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la ley 24.241 (artículo 94) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional a que estuviese afiliado el damnificado.

Art. 16. — Retorno al trabajo por parte del damnificado.

1. La percepción de prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

2. El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con Incapacidad Laboral Permanente.

Art. 17. — Gran invalidez.

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT).

2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.

Art. 18. — Muerte del damnificado.

1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria prevista en el artículo 15, apartado 2.

2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas.

Art. 19. — Contratación de la renta periódica.

1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y una ART o una compañía de seguros de retiro, quienes a partir de la celebración del contrato respectivo, serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa.

En el caso de empresas, que no se afilien a una ART, dicha prestación deberá ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario. Esta, a partir de la celebración del contrato respectivo, será la única responsable de su pago.

2. El Poder Ejecutivo nacional fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro.

Capítulo V

Prestaciones en especie

Art. 20. —

1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley, las siguientes prestaciones en especie:

- a) Asistencia médica y farmacéutica;
- b) Prótesis y ortopedia;
- c) Rehabilitación;
- d) Recalificación profesional; y
- e) Servicio funerario.

2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos a), c) y d).

3. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c) del presente artículo, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación.

Capítulo VI

Determinación y revisión de las incapacidades

Art. 21. — Comisiones médicas.

1. Las comisiones médicas y la comisión médica central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:

- a) La naturaleza laboral del agente o profesional de la enfermedad;

b) El carácter y grado de la incapacidad;

c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.

2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias de su competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes.

3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas.

4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios.

Art. 22. — Revisión de la incapacidad.

Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.

Capítulo VII

Régimen financiero

Art. 23. — Cotización.

1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador.

2. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la ley 24.241 (artículo 9º), incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del SIJP.

3. La cuota debe ser declarada y abonada juntamente con los aportes y contribuciones que integran la CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estarán a cargo de la ART.

Art. 24. — Régimen de alícuotas.

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo establecerán los indicadores que las ART habrán de tener en cuenta para diseñar el régimen de alícuotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva, y la permanencia del empleador en una misma ART.

2. Cada ART deberá fijar su régimen de alícuotas en función del cual será determinable, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual.

3. El régimen de alícuotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. Dentro del régimen de alícuotas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.

Art. 25. — Tratamiento impositivo.

1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias.

2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.

3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta vitalicia previsional.

4. Invítase a las provincias a adoptar idénticas exenciones que las previstas en el apartado anterior.

5. Las reservas obligatorias de las ART están exentas de impuestos.

Capítulo VIII

Gestión de las prestaciones

Art. 26. — Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la SRT, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos.

2. La autorización conferida a una ART será revocada:

- a) Por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos;
- b) Por omisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT;
- c) Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación.

3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que —de conformidad con la reglamentación— ellas mismas determinen.

4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados:

- a) El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidentes y enfermedades inculpables;
- b) La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo con fundamento en leyes anteriores.

Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la LRT.

Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros.

5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de tres millones de pesos (\$ 3.000.000) que deberá integrarse al momento de la constitución.

El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos.

6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad.

En este último caso, los bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT.

7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.

Art. 27. — Afiliación.

1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.

2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.

3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido, y plazo de vigencia determinará la SRT.

4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el Régimen de Alicuotas vigente a la fecha de la renovación.

5. La rescisión del contrato de afiliación estará sujeta a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra ART o a su incorporación en el régimen de autoseguro.

Art. 28. — Responsabilidad por omisiones.

1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.

2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la LRT.

4. Si el empleador omitiera —total o parcialmente— el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.

Art. 29. — Insuficiencia patrimonial.

Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo al Fondo de Garantía de la LRT.

La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse.

Art. 30. — Autoseguro.

Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.

Capítulo IX**Derechos, deberes y prohibiciones****Art. 31. — Derechos, deberes y prohibiciones.****1. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo:**

- a) Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el plan de mejoramiento;
- b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la LRT;
- c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas;
- d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento;
- e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alicuotas, y demás elementos que determine la reglamentación;
- f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni destinar recursos a objetos distintos de los previstos por esta ley;
- g) No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores, con carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación.

2. Los empleadores:

- a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de alicuotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos;
- b) Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados;
- c) Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos;
- d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;
- e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.

3. Los trabajadores:

- a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas;

- b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional;
- c) Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo;
- d) Se someterá a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación;
- e) Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran.

Art. 32. — Sanciones.

1. El incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.
2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados de las ART y de las compañías de seguros de retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado I inciso a), (Asistencia médica y farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal.
3. Si el incumplimiento consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años.
4. El incumplimiento del empleador autoasegurado, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las prestaciones dinerarias a su cargo, o de los aportes a los fondos creados por esta ley será sancionado con prisión de dos a seis años.
5. Cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.
6. Los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corridos de intimado a ello en su domicilio legal.
7. Será competente para entender en los delitos previstos en los apartados 3 y 4 del presente artículo la Justicia federal.

Capítulo X**Fondo de Garantía de la LRT****Art. 33. — Creación y recursos.**

1. Créase el Fondo de Garantía de la LRT con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada.
2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o la ART en su caso, deberán realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial en los plazos que fije la reglamentación.

3. El Fondo de Garantía de la LRT será administrado por la SRT y contará con los siguientes recursos:

- a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad;
- b) Una contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, a fijar por el Poder Ejecutivo nacional, no inferior al aporte equivalente al previsto en el artículo 34.2;
- c) Las cantidades recuperadas por la SRT de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;
- d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía de la LRT y las sumas que le transfiera la SRT;
- e) Donaciones y legados.

4. Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores. Estos fondos serán administrados y utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.

Capítulo XI

Fondo de Reserva de la LRT

Art. 34. — Creación y recursos.

1. Créase el Fondo de Reserva de la LRT con cuyos recursos se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART, que éstas dejarán de abonar como consecuencia de su liquidación.

2. Este fondo será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se formará con los recursos previstos en esta ley, y con un aporte a cargo de las ART cuyo monto será anualmente fijado por el Poder Ejecutivo nacional.

Capítulo XII

Entes de Regulación y Supervisión de la LRT

Art. 35. — Creación.

Créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Art. 36. — Funciones.

1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en especial, las siguientes:

- a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios;

b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;

c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;

d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;

e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;

f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas, y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad.

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las funciones que le confieren esta ley, la ley 20.091, y sus reglamentos.

Art. 37. — Financiamiento.

1. Los gastos de funcionamiento de los entes de supervisión se atenderán con la tasa prevista en la ley 20.091 (artículo 81), aplicada sobre las cuotas mensuales que el empleador paga a las ART.

2. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes con el fin de proveer a la SRT del equipamiento y presupuesto necesario para el presente ejercicio.

Art. 38. — Autoridades y régimen del personal.

1. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo nacional previo proceso de selección, será la máxima autoridad de la SRT.

2. La remuneración del superintendente y de los funcionarios superiores del organismo será fijada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

3. Las relaciones del personal con la SRT se regirán por la legislación laboral.

Capítulo XIII

Responsabilidad civil del empleador

Art. 39. — Responsabilidad civil.

1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1.072 del Código Civil.

2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil.

3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior, el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de esta ley a cargo de las ART o de los autoasegurados.

4. Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6º de esta ley hubiera sido causada por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán

reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado.

5. En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescritas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado.

Capítulo XIV

Órgano tripartito de participación

Art. 40. — Comité Consultivo Permanente.

1. Créase el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por cuatro representantes del gobierno, cuatro representantes de la CGT, cuatro representantes de las organizaciones de empleadores, dos de los cuales serán designados por el sector de la pequeña y mediana empresa, y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

El comité aprobará por consenso su reglamento interno, y podrá proponer modificaciones a la normativa sobre riesgos del trabajo y al régimen de higiene y seguridad en el trabajo.

2. Este comité tendrá funciones consultivas en las siguientes materias:

- a) Reglamentación de esta ley;
- b) Listado de enfermedades profesionales;
- c) Tablas de evaluación de incapacidad laborales;
- d) Determinación del alcance de las prestaciones en especie;
- e) Acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
- f) Indicadores determinantes de la solvencia económica financiera de las empresas que pretenden autoasegurarse;
- g) Definición del cronograma de etapas de las prestaciones dinerarias;
- h) Determinación de las pautas y contenidos del plan de mejoramiento.

3. En las materias indicadas, la autoridad de aplicación deberá consultar al comité con carácter previo a la adopción de las medidas correspondientes.

Los dictámenes del comité en relación con los incisos b), c), d) y f) del punto anterior, tendrán carácter vinculante.

En caso de no alcanzar unanimidad, la materia en consulta será sometida al arbitraje del presidente de la Nación, quien juzgará entre las propuestas elevadas por los sectores representados.

El listado de enfermedades profesionales deberá confeccionarse teniendo en cuenta la causa directa de la

enfermedad con las tareas cumplidas por el trabajador y por las condiciones medioambientales de trabajo.

Capítulo XV

Normas generales y complementarias

Art. 41. — Normas aplicables.

1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.080.

2. No es aplicable al régimen de esta ley el artículo 188 de la ley 24.241.

Art. 42. — Negociación colectiva.

La negociación colectiva laboral podrá:

- a) Crear Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo;
- b) Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Art. 43. — Denuncia.

1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo.

2. La reglamentación determinará los requisitos para esta denuncia.

Art. 44. — Prescripción.

1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los cinco años desde el cese de la relación laboral.

2. Prescriben a los diez (10) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias.

Art. 45. — Situaciones especiales.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:

- a) Pluriempleo;
- b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial;
- c) Sucesión de siniestros; y
- d) Trabajador jubilado o con jubilación postergada.

Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Art. 46. — Competencia judicial.

1. Las resoluciones de la Comisión Médica Central serán recurribles por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los recursos podrán ser interpuestos ante los juzgados federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal y ante los juzgados federales con asiento en las provincias, y deberán ser i

puestos y fundados en el término de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución administrativa de la Comisión Médica Central.

Los juzgados federales efectuarán el trámite de acuerdo a lo prescrito por los artículos 49.4 y 49.5 de la ley 24.241 y elevarán las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro del término de 5 días hábiles desde la interposición del recurso.

2. Para la acción derivada del artículo 1.072 del Código Civil en la Capital Federal será competente la justicia civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia según el criterio establecido precedentemente.

3. El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados a las ART así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados y aportes de las ART, se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la ART o por la SRT.

En la Capital Federal se podrá optar por la justicia nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia en lo civil o comercial.

En las provincias serán los tribunales con competencia en lo civil o comercial.

Art. 47. — Concurrencia.

1. Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Cuando la contingencia se hubiera originado en un proceso desarrollado a través del tiempo y en circunstancias tales que se demostrara que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes ART, la ART obligada al pago según el párrafo anterior podrá repetir de las restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas o los pagos efectuados, en la proporción en la que cada una de ellas sea responsable conforme al tiempo e intensidad de exposición al riesgo.

Las discrepancias que se originen en torno al origen de la contingencia y las que pudieran plantearse en la aplicación de los párrafos anteriores, deberán ser sometidas a la SRT.

2. Cuando la primera manifestación invalidante se produzca en circunstancia en que no exista ni deba existir cotización a una ART las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la última ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su caso serán de aplicación las reglas del apartado anterior.

Art. 48. — Fondos de garantía y de reserva.

1. Los fondos de garantía y de reserva se financiarán exclusivamente con los recursos previstos por la presente ley. Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros.

2. Dichos fondos no formarán parte del presupuesto general de la administración nacional.

Art. 49. — Disposiciones adicionales y finales.

Disposiciones adicionales

Primera: modificación de la ley 20.744.

Sustitúyese el artículo 75 de la ley 20.744 por el siguiente texto:

1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

Segunda: modificaciones a la ley 24.241.

Sustitúyese el artículo 177 de la ley 24.241 por el siguiente texto:

El seguro del artículo anterior sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas, que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión "seguros de retiro".

Tercera: modificaciones a la ley 24.028.

Reemplázase el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.028 por el siguiente:

El trabajador que sufra un daño psicofísico por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo que estuviese a disposición del empleador, deberá —previo al inicio de cualquier acción judicial— denunciarlo, a fin de iniciar el procedimiento administrativo obligatorio de conciliación, ante la autoridad administrativa del trabajo. Los jueces no darán traslado de las demandas que no acrediten el cumplimiento de esta obligación.

Cuarta: compañías de seguros.

1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de accidentes de trabajo podrán:

- a) Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT, siendo sujeto, exclusivamente en lo referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos y obligaciones que las ART, a excepción de la posibilidad

de contratar con un beneficiario una renta periódica, de la obligación de tener objeto único y las exigencias de capitales mínimos.

En este último caso, serán de aplicación las normas que rigen la actividad aseguradora general. Recibirán además igual tratamiento impositivo que las ART.

Los bienes que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta LRT, deberán ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades, y no podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos.

En caso de liquidación, estos bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT y no podrán ser afectados por créditos o acciones originados en otras operatorias;

- b) Convenir con una ART la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes como consecuencia de esa operatoria, a la fecha que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación debiendo, en tal caso ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos.

Quinta: contingencias anteriores.

1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derechos únicamente a las prestaciones de la LRT, aun cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de esta ley.

2. En este supuesto el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la ART a la que el empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro o que la relación laboral con el damnificado se hubiere extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la ART.

Disposiciones finales

Primera: esta LRT entrará en vigencia una vez que el Comité Consultivo Permanente apruebe por consenso el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades.

Tal aprobación deberá producirse dentro de los 180 días desde la promulgación de esta ley.

Hasta tanto el Comité Consultivo Permanente se expida, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado por única vez y con carácter provisorio a dictar una lista de enfermedades y la tabla de evaluación de incapacidades.

Segunda:

1. El régimen de prestaciones dinerarias previsto en esta ley entrará en vigencia en forma progresiva. Para ello se definirá un cronograma integrado por varias etapas previendo alcanzar el régimen definitivo dentro de los tres años siguientes a partir de la vigencia de esta ley.

2. El paso de una etapa a la siguiente estará condicionado a que la cuota promedio a cargo de los empleadores asegurados permanezca por debajo del 3 % de la nómina salarial. En caso que este supuesto no se verifique se suspenderá transitoriamente la aplicación del cronograma hasta tanto existan evidencias de que el tránsito entre una etapa y otra no implique superar dicha meta de costos.

3. Durante la primera etapa el régimen de prestaciones dinerarias correspondiente a la incapacidad permanente parcial será el siguiente: para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente fuera igual o superior al 50 % e inferior al 66 % y mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. Una vez finalizada la etapa de provisionalidad se abonará una renta periódica cuyo monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. En ningún caso el valor actual esperado de la renta periódica en esta primera etapa podrá ser superior a \$ 55.000. Este límite se elevará automáticamente a \$ 110.000, cuando el Comité Consultivo Permanente resuelva el paso de la primera etapa a la siguiente.

En el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 % se abonará una indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esa suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar 55.000 por el porcentaje de incapacidad.

Tercera:

1. La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las disposiciones adicionales primera y tercera entrarán en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

3. A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente.

Art 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. FIERRI.

Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 1.952 del Poder Ejecutivo nacional de fecha 4-11-94.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Tucumán, del Partido Justicialista.

Sr. Miranda. — Señor presidente, señores senadores: como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social voy a informar el dictamen en mayoría. Y voy a referirme a un tema preocupante para el conjunto de los trabajadores argentinos, como lo es el de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Si vamos a analizar este proyecto, contenido en este orden del día, debemos visualizar —para ser justos en el análisis— la situación actual de la legislación vigente, que regula, que norma los accidentes de trabajo en nuestro país.

La ley vigente, la 9.688, del año 1915, que tuvo sucesivas modificaciones —la última modificación es del 14 de noviembre de 1991, cuando se sancionó la ley 24.028—, no ha conformedo a los trabajadores ni a los empleadores. En el caso de los trabajadores, porque no ha logrado hasta el presente disminuir los riesgos laborales y, simplemente, ha apuntado al aspecto indemnizatorio. En el caso de los empleadores —aunque en ningún momento puede vérsela con el análisis simplista de una disminución de costos laborales— ya que tampoco ha permitido reducir sus costos y, por ende, no se ha facilitado la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Esta realidad, entonces, ha llevado al gobierno nacional, a los empleadores y a los trabajadores —representados por la Confederación General del Trabajo— a un acuerdo-marco realizado en julio del '94, donde se planteó la necesidad de analizar reformas a la legislación vigente. En ese ámbito, el marco integrado por los factores específicamente interesados, se originó la idea de reformar esta ley que —como les decía recién— no ha solucionado la inquietud de los factores en cuestión.

Por eso, debemos ver que, fundamentalmente, se apunta a prever los riesgos de accidentes y enfermedades laborales, que —creo— es lo sustancial de este proyecto que está en tratamiento.

Si nosotros no visualizamos el objetivo primordial de este proyecto de ley, que es la prevención, quizás sea erróneo nuestro análisis, porque hoy un trabajador que tuviera la desgracia de sufrir un accidente, de una punta a otra de nuestro país, estaría ante la realidad de tener que recurrir, en algunos casos por insolvencia de los empleadores, a trámites judiciales engorrosos cuya duración mínima, en el mejor de los

casos, es de tres años. Esto hace que el espíritu resarcitorio que tiene la ley tampoco llegue a tiempo para subsanar estas desgracias.

Nosotros debemos ver que en esta legislación en tratamiento el objetivo primario es evitar los riesgos laborales a través de la prevención, y un efecto secundario es resarcir el daño al trabajador o a sus familiares, incluyendo también algo tan importante como la rehabilitación del trabajador o su reubicación laboral.

Sustancialmente, esta ley apunta a revalorizar la función de protección del trabajador. Esto es lo que debemos tomar, porque esta norma debe tender a disminuir los niveles de siniestralidad y mejorar la reinserción laboral de los incapacitados por accidentes de trabajo.

También la normativa que proponemos amplía notablemente la cantidad de trabajadores protegidos de estos riesgos, tratando de alcanzarlos a todos.

¿Cómo se va a lograr esto? Estableciendo un seguro obligatorio de accidentes, sin dejar librada a la solvencia del empleador la reparación del daño. Esto tiende a la universalidad de la protección, puesto que el sistema responde aun en caso de insolvencia del empleador o quebranto de la administradora de riesgos del trabajo a través de la creación de un fondo de garantía y del fondo de reserva, para los que se prevén recursos específicos.

Esta propuesta tiende a hacer coincidir los intereses de ambos sectores de la producción, por cuanto al empleador le convendrá cumplir con las normas de seguridad y prevención de riesgos, disminuyendo así el costo de la prima o cuota a pagar a las aseguradoras; y el trabajador podrá tener mayor seguridad en sus tareas.

Así se establecen entre los empleadores y las administradoras los denominados "planes de mejoramiento", por los que los primeros se obligan en plazos determinados a dotarse de todas las medidas de prevención y seguridad, actuando las administradoras y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como organismo de contralor y supervisión del cumplimiento de dichas obligaciones.

Los planes de mejoramiento no van a ser arbitrariamente decididos sino que va a crearse un comité consultivo integrado por representantes de la Confederación General del Trabajo, de los empleadores —fundamentalmente de las Pymes—, y del Ministerio de Trabajo de la Nación en representación del gobierno nacional.

Al apuntar esta ley a la disminución del costo laboral, va a beneficiar especialmente al em-

pleador responsable, que cumpla estrictamente con las normas de seguridad e higiene, o, en su caso, con el plan de mejoramiento acordado, y no a aquellos que actúan dolosamente en perjuicio del trabajador. Quienes no procedan responsablemente deberán responder, con un monto ilimitado, por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador.

El proyecto se preocupa, también, por acortar en lo posible los plazos que actualmente existen entre el momento en que se produce el accidente o se manifiesta la enfermedad y el momento en que tales perjuicios son reparados, ya sea en dinero o en especie, considerando especies a la atención médica, prótesis, etcétera.

El seguro que obligatoriamente se establece permitirá acceder rápidamente a la reparación del daño sin necesidad de realizar un largo juicio, muchas veces con resultados inciertos. Todo esto tiene por objeto asegurar la automatización de las prestaciones con los menores costos de gestión posibles.

Se modifica también mediante este proyecto la forma de reparación del daño, que sólo en los casos de menor porcentaje de incapacidad consistirá en el pago de una suma única de dinero. En el resto de los casos la reparación consistirá en el pago de sumas mensuales permanentes durante toda la vida del trabajador y hasta el momento de su jubilación. Estas sumas serán proporcionales al sueldo que éste percibía y al porcentaje de incapacidad que padece.

Esta forma de pago tiende a sustituir la pérdida constante de capacidad de ganancia que sufrió el trabajador por el daño o perjuicio padecido.

Se agregan también a las prestaciones económicas mencionadas las prestaciones en especie, como la asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia y, sobre todo, la rehabilitación y preparación del trabajador para su reinserción laboral.

Se armonizan también las normas que regulan los accidentes y las relativas al sistema previsional, dado que serán los mismos organismos médicos los que determinarán el grado de incapacidad del trabajador. De esta manera, el proyecto viene a resolver los conflictos ocasionados por las diferencias de criterio entre quienes evaluaban el grado de incapacidad producto del accidente y quienes determinaban los requisitos para acceder a la jubilación por invalidez. De esta manera, se concluye con aquellas situaciones en las que el trabajador se encontraba in-

capacitado para continuar trabajando pero se le negaba el derecho a obtener una jubilación.

Del mismo modo, se armoniza el pasaje de un sistema a otro. El trabajador estará protegido, en primer lugar, por las prestaciones que establece esta ley, y luego, sin interrupción alguna, pasará a ser beneficiario del régimen jubilatorio.

Las prestaciones que este proyecto establece estarán a cargo de empresas con fines de lucro o sin él, de derecho privado y destino único, las que serán controladas en su solvencia financiera. Asimismo, el cumplimiento de sus obligaciones estará garantizado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que tendrá a su cargo, además, el dictado de normas sobre la materia y el control de las condiciones y del medio ambiente de trabajo.

Este organismo no genera nuevas estructuras burocráticas y disminuye los gastos actuales, puesto que viene a reemplazar a la actual Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Su financiamiento proviene de la tasa prevista actualmente en la ley de entidades de seguros.

Al control de las condiciones de trabajo a cargo de la mencionada superintendencia debe agregarse el rol de supervisión que esta ley asigna a las administradoras de riesgos del trabajo, lo que constituye una novedad, ya que a través del plan de mejoramiento acordado entre estas empresas y los empleadores, éstos están obligados al cumplimiento gradual de las normas de seguridad e higiene, y no hacerlos les acárrea no sólo sanciones de tipo económico sino la imposibilidad de bajar el costo de su cuota o prima.

A estos controles se añade la creación de un organismo participativo con representación tripartita e importantes facultades de decisión, como el Comité Consultivo Permanente. Este comité, además de asesorar en diversos temas, tiene facultades de decisión respecto de cuestiones fundamentales para esta ley, como las siguientes: elaborar el listado de las enfermedades profesionales; dictar las tablas de evaluación de incapacidades laborales; determinar el alcance de las prestaciones en especie y fijar los indicadores que deberán acreditar respecto a su solvencia económica y financiera las empresas que pretendan autoasegurarse.

En conclusión, estimo que aprobar el presente proyecto significará un paso adelante en la protección del trabajador y simultáneamente un beneficio para el empleador en cuanto a la reducción de sus gastos y la previsibilidad de los

misimos, logrando una mayor equidad entre las partes. Por ello, solicito que este cuerpo dé la aprobación en general al dictamen en mayoría. En cuanto al tratamiento en particular, voy a solicitar la corrección de algunos artículos, como el 4º, el 36 y el 46, y uno nuevo, el 50, que oportunamente plantearé.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, presidente del bloque Justicialista.

Sr. Molina. — Señor presidente: quiero pedir el pase a cuarto intermedio para luego de finalizado el tratamiento de esta norma. En esta sesión también tenemos que tratar el tema de elección de autoridades de la Capital y mañana a las 16 y 30 vendría el ministro Cavallo para la interpelación solicitada por la oposición. Entonces, nos vamos a encontrar con que no podremos tratar alguna norma. De modo que mi petición es que los presidentes de bloque nos pongamos de acuerdo para combinar horarios y apenas tengamos quórum fijemos una hora —11 de la mañana— para empezar a tratar el tema de elección de autoridades en la Capital, poder finalizar a las 13 horas con la votación, reunir los presidentes de bloque para acordar la mecánica de la interpelación y comenzar a las 16 y 30. Esa sería una propuesta y una petición, señor presidente.

Sr. Presidente. — Señor senador: quiero hacer algunas aclaraciones que son pertinentes. En primer lugar, el ministro de Economía me informó que vendrá mañana a las 16 y 30 y, en segundo lugar, tengo anotados a señores senadores que —si se cumple el Reglamento— están habilitados para hablar siete horas y media en el tratamiento en general del proyecto de ley de accidentes de trabajo.

Si lo que queremos es votar el proyecto de ley de accidentes de trabajo y el de elección de autoridades para la Capital Federal, una posibilidad sería reducir al 50 por ciento los plazos reglamentarios para que los señores senadores hagan uso de la palabra. Porque hoy, con el Reglamento como está, todos pueden usar los sesenta minutos, con excepción de un senador de los anotados que puede disponer de treinta minutos, con lo cual evidentemente no habrá quórum al momento de votar la norma sobre accidentes de trabajo. Nos vamos a encontrar con una situación de las siguientes características. Si pasamos a cuarto intermedio para mañana, tendremos que seguir con el tratamiento del proyecto sobre accidentes de trabajo, votar el proyecto de ley electoral —les recuerdo que se acordó en reunión de presidentes de bloque que

ambas iniciativas se voten hoy o, en su defecto, mañana—, y luego se nos vendrá encima la interpelación. Así que no nos alcanzará con que exista una actitud voluntaria de intentar continuar mañana por la mañana, sino que habría que limitar el tiempo de exposición de los señores senadores.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: con la misma preocupación puesta de manifiesto por usted y por el presidente del bloque Justicialista, consideramos imprescindible que en el curso de hoy o de mañana se sancione el proyecto de ley por el cual se convoca a la elección de estatuyentes para la Capital Federal, lamentando que no hayamos logrado consenso pleno con el justicialismo, como era nuestro deseo.

Sugiero que se vote pasar a cuarto intermedio dentro de dos horas para continuar mañana a las 10. Así, calculo que alrededor de las 11 de mañana podríamos estar votando el proyecto de ley sobre accidentes de trabajo e inmediatamente comenzaríamos con el tema de la elección de estatuyentes para la Capital Federal.

Además, por supuesto, me sumo a la sugerencia del señor presidente de procurar acortar en lo posible la exposición de los oradores.

Sr. Presidente. — Procurar acortar no es lo mismo que establecer un mecanismo limitativo por votación.

Sr. Genoud. — Por lo general trato de no coartar el derecho al uso de la palabra, porque eso nos ha traído más de un problema.

Sr. Presidente. — No tengo ningún inconveniente. Yo voy a seguir llamando para votar y, mientras tanto, seguirán haciendo uso de la palabra los senadores que lo soliciten.

—Se continúa llamando.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Ha sido clara la propuesta del presidente de nuestro bloque. Considero que si ponemos un poco de vocación, este proyecto de ley puede ser sancionado esta noche. Cuando tengamos quórum, podremos votar el cuarto intermedio para continuar trabajando a primera hora de mañana con el proyecto de ley sobre elección de estatuyentes para la Capital Federal.

Sr. Presidente. — Claro. Si todos hablan concisamente, como lo hizo el señor senador Miranda, llegaremos al objetivo buscado.

Se puede votar si se limita el tiempo de exposición de los señores senadores. Ahora bien, si no quieren hacerlo, no hay ningún inconveniente.

Si están de acuerdo, cuando logremos quórum, someteré a votación el pase a cuarto intermedio a partir de las 23 de hoy hasta las 11 de mañana.

Sr. Villarroel. — Hasta las 10, señor presidente.

Sr. Presidente. — Está bien. Si usted quiere, podemos votar que se pase a cuarto intermedio hasta las 10, pero les pido que por favor empecemos a las 11. Yo voy a estar sentado acá.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, de la Unión Cívica Radical.

Sr. León. — Coincido totalmente con la idea de achicar las exposiciones.

Sr. Romero Feris. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. León. — Cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Si no entendí mal, después de que hable el señor senador León se pasará a cuarto intermedio hasta las 11 de mañana.

Sr. Presidente. — No. A las 23 de hoy se pasará a cuarto intermedio hasta mañana. Pero como el señor senador León ha adelantado que no va a emplear todo el tiempo de que dispone para su exposición, usted va a poder hacer uso de la palabra.

Sr. Romero Feris. — Seré muy breve, señor presidente.

Sr. Presidente. — Será maravilloso para todos. *(Risas.)*

El señor senador por Santa Cruz solicita una interrupción. ¿Usted se la concede, señor senador León?

Sr. León. — Sí.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Como bien lo ha dicho usted, vamos a seguir llamando para formar quórum y poder votar el cuarto intermedio. Mi idea coincide con la expuesta por el señor senador Britos, en cuanto a que hoy, por lo menos, se sancione el proyecto de ley sobre accidentes de trabajo si logramos mayoría para ello — y mañana trabajemos sobre otra norma. Porque el criterio de votar mañana a las 11 hará que hoy nos quedemos sin quórum y casi sin debate.

Por lo tanto, coincidiendo con la postura del señor presidente, propongo que tratemos de adoptar un criterio unificado: que cada bloque designe a un orador de fondo o que se disminuya el tiempo de exposición de cada orador. Si no fijamos una norma de autodisciplina entre nosotros y establecemos un tiempo de treinta minutos por senador, creo que no vamos a poder considerar la norma vinculada con los estatuyentes de la Capital si queremos contar mañana con la presencia del señor ministro para informar sobre Yacyretá.

Creo que es el cuerpo quien debe decidir acerca de si se otorga un tiempo de exposición de treinta minutos a cada senador. Y en caso de excederse, la Presidencia lo llamaría al orden. De lo contrario, cada uno de los bloques puede hacer concesiones internas y establecer un único orador de fondo.

Sr. Presidente. — Se sigue llamando para votar.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: estamos considerando un proyecto de ley que es caro para la Unión Cívica Radical, porque siempre hemos sido sensibles a todos los problemas que afectan a los sectores del trabajo argentino.

Da la sensación de que esta norma es una adaptación al modelo que está instalado en el país y que, a la vez, responde a un esquema de globalización que hasta ahora, a través de su aplicación, no muestra precisamente un esfuerzo muy solidario con los sectores del trabajo.

Nosotros estamos dejando atrás no sólo la ley y el espíritu de 1915 sino también otra norma que hace seis años se puso en marcha con algunas características estructurales distintas, pero que seguramente fue sancionada con el deseo de custodiar valores sustanciales históricos.

Como dijo el señor senador, estamos en un marco que responde a un acuerdo entre la CGT, la Unión Industrial Argentina y el gobierno.

Sr. Presidente. — Disculpe que lo interrumpa, señor senador.

Sr. León. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente. — Como se ha formado quórum, tengo que someter a votación las mociones formuladas.

Hay dos posturas distintas, que me gustaría que brevemente sean consensuadas. El señor senador por Mendoza propuso que hoy a las 11 de la noche se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. En cambio, el señor senador

por Santa Cruz propuso que el proyecto de ley de accidentes de trabajo sea votado hoy. Como se ve, son dos posiciones muy distintas.

Si hoy levanto la sesión a las 23 hasta mañana a las 10, seguramente se votará mañana, porque a ninguno se le escapa que, luego de la votación, nos quedaremos con un número reducido de señores senadores. En consecuencia, quisiera que ambos bloques lleguen a un acuerdo al respecto.

Sr. Molina. — Señor presidente: por una cuestión lógica, creo que corresponde que el proyecto de ley de accidentes de trabajo sea votado hoy.

Si aprobamos el cuarto intermedio hasta mañana, los mismos señores senadores de la oposición, que son quienes tienen más oradores, prácticamente no serán oídos, porque, aunque no quiero suponer mal, el 50 por ciento de los legisladores se retirará. Por lo tanto, mañana nos vamos a encontrar con que votaremos un proyecto de ley que fue debatido a última hora, con muy pocos senadores presentes.

Nuestra propuesta es que hoy a las 11 de la noche votemos el proyecto de ley de accidentes de trabajo y luego pasemos a cuarto intermedio hasta mañana, con posibilidad de iniciar el tratamiento de esta norma tan importante sobre los estatuyentes de la Capital.

Sr. Presidente. — Si es posible, trataré de dar coherencia al pensamiento de los señores senadores.

Hoy a las 23 se votará, y si a esa hora no hay quórum, levantaré la sesión hasta mañana a las 10.

Sr. de la Rúa. — Cuarto intermedio.

Sr. Presidente. — Sí, obviamente, cuarto intermedio. Es correcta la apreciación en el sentido de que no es levantar sino pasar a cuarto intermedio. ¿Estamos de acuerdo?

Sr. Menem. — Si a las 11 de la noche no contamos con quórum para votar el proyecto de ley, tampoco lo tendremos para votar el cuarto intermedio. Por lo tanto, creo que debe votarse ahora el cuarto intermedio.

Sr. Presidente. — Se va a votar ahora. En consecuencia, el criterio a seguir sería el siguiente. A las 23 se votará el proyecto de ley de accidentes de trabajo y, si no hubiera quórum, automáticamente, la sesión pasará a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis. Vamos a terminar discutiendo este tema más que el asunto principal de la sesión.

Sr. Britos. — Creo que este es un tema muy importante. No sé cuántos oradores habrá anotados...

Sr. Presidente. — Ocho.

Sr. Britos. — ... pero no podemos limitarles su derecho a opinar.

Votemos el cuarto intermedio y si a las 11 ó 12 de la noche no tenemos quórum para votar la iniciativa, lo haremos mañana. Pero si ponemos ahora como límite horario las 23, algunos senadores se sentirán mal, porque les parecerá que les hemos reducido el tiempo que deben tener para expresarse, sobre todo considerando la importancia del tema que estamos tocando.

Sr. Presidente. — Si hay consenso, procederemos según lo propuesto por el senador Genoud; es decir que a las 23 pasaremos a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

Sr. Genoud. — Sí; porque creo que es imposible compatibilizar las dos posiciones.

Además, no he visto que una sugerencia como la formulada por el señor presidente del bloque justicialista se haya puesto en práctica en el Senado, por lo menos en lo que va de mi mandato.

Sr. Presidente. — Efectivamente.

Sr. Genoud. — Creo, entonces, que correspondería pasar a las 23 a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

La propuesta formulada por el señor presidente del bloque Justicialista podría resultar impracticable porque si se dice que se vota a las 11 y a esa hora no hay quórum, quedaríamos en una situación...

Sr. Presidente. — ¿Hay consenso, entonces, en que hoy a las 23 pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a las 10?

Sr. Cafiero. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Si vamos a pasar a cuarto intermedio hasta mañana, no veo por qué no se puede prolongar la reunión de hoy hasta terminar con todas las exposiciones. Y mañana votamos, como primera labor del día.

Sr. Britos. — Claro. Quienes vayan a exponer, que se queden.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Con todo respeto, debo decir que no sé qué es peor, porque habrá un senador hablando para un recinto vacío cuando se trata un proyecto de ley de accidentes de trabajo.

Sr. Alasino. — Votemos el cuarto intermedio hasta mañana a las 11 y si alcanza, alcanza.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Hay una moción del señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, debidamente apoyada, para que a las 23 de hoy pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada. Se procederá en consecuencia.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Decía, señor presidente, que estamos frente a un proyecto de ley de accidentes de trabajo último modelo, que no convence a la Unión Cívica Radical, porque se insiste en buscar el achicamiento de las responsabilidades del Estado y se las reemplaza por sistemas de lucro que, si nos remitimos a algunos antecedentes vividos en el país, nos demostrarán que no han tenido el éxito que merece el sujeto al que apunta esta norma.

Como siempre, el radicalismo dirá lo que piensa con mucha humildad. Sabemos que sólo el desarrollo de la realidad y la aplicación de esta iniciativa mostrarán a la larga nuestras ideas y nuestros pensamientos y seguramente señalarán los aciertos y los errores.

Tenía mucho material pero sintetizaré totalmente mi exposición diciendo que una de las características básicas de este proyecto de ley es la presencia —la repetición— de las estructuras que también se utilizaron respecto del tema de las jubilaciones.

Muy rápidamente diré que el artículo 1º establece como objetivo reducir la siniestralidad, pero no se han aportado índices sobre este tema y no hemos tenido respuestas sobre la significación de esto, tal como en algún momento pedimos en la Comisión.

Solicitamos informes a los ministerios de Trabajo y de Economía, pero nos interesaban mucho los de este último ya que según dice el ministro, hay que ir a esta ley porque no funciona la otra, tal vez por los problemas económicos que está viviendo el país.

Nosotros criticamos el funcionamiento y al ministro, porque acá hay un ministro que dice que todo el drama social y la desocupación de la Nación se deben a la no flexibilización laboral. Pediría que cada uno se coloque la mano en el corazón y se pregunte si podemos decir lealmente

que los culpables de la desocupación son los propios desocupados.

El radicalismo tiene una historia saludable en la custodia de los valores de los sectores más desprotegidos. Nunca la Unión Cívica Radical votó una ley contra los sectores del trabajo. Y no digo que esto sea contra los sectores del trabajo pero se inserta en un tipo de política que en alguna medida aparece creando dudas en el sector del trabajo y creando alguna satisfacción en el sector empleador.

Los radicales creemos que no hay empleo sin empleadores. Es decir que es necesaria una ecuación de buen funcionamiento, a los efectos de que el ordenamiento de ese equilibrio ponga en marcha un tipo de política económica que custodie muchos de los valores que ahora están desapareciendo del espectro social y económico del país.

En el campo social nosotros hemos caminado para atrás estos últimos tiempos. Me da la impresión de que hay un ministro de Economía que prefiere atender los compromisos de afuera y abandona bastante el campo social del país. Esto nos lleva a desencuentros, a marginamientos y a situaciones que nadie busca, pero ahí está presente una realidad.

Del acuerdo que mencionó el señor presidente de la comisión, realizado entre la Unión Industrial, la CGT y el gobierno, resulta que después se alejó la primera entidad porque no estaba convencida de si esto sirve realmente para bajar los costos.

Nosotros tenemos la duda de que muchas de las empresas que se van a forjar para el seguro de riesgo del trabajo tengan sensibilidad y abandonen sus históricos afanes de lucro en homenaje a custodiar realmente al trabajador.

Incluso creo que por primera vez —y no soy experto en esto— en una ley en que hay que custodiar a los trabajadores les decimos que no pueden ir a reclamar a la Justicia. O sea que la empresa de seguros va a ser juez y parte. Y creamos dentro de esta ley algunos factores de funcionamiento que realmente nos preocupan.

Estoy pensando que tengo que apurarme y no sé cómo hacer la síntesis. Por ejemplo, creo que esta ley vulnera la Constitución. Tal vez sea discutible, pero a mi criterio, como hombre del interior, vulnera la Constitución porque crea obligaciones sobre provincias y sobre ciudadanos del interior.

Ya se ha jugado bastante con el esquema federal y sería bueno de una vez empezar a respetarlo.

En el texto de la iniciativa se delegan en el Ejecutivo algunas responsabilidades, y la nueva Constitución prohíbe esta delegación.

Mi preocupación es que se crea un modelo especial que se inserta en las necesidades del gobierno más que en las urgencias de los propios trabajadores.

Así pasó con las empresas privadas de jubilaciones. Creamos las administradoras de fondos de jubilaciones porque parecían un gran negocio, con buena capacidad de financiamiento para algunas de ellas y para el propio gobierno, en función de la acumulación. Pero esto está fracasando, porque hay tal grado de pobreza en el país que el 50 por ciento de los trabajadores no realiza el aporte correspondiente.

Aquí se crean las empresas aseguradoras del riesgo en el trabajo. Este proyecto exime al patrón o empleador de responsabilidades. Para nosotros es muy importante el capital, pero el capital debe comprender que hay una sociedad que ha cambiado. Creo que muchos todavía no han cambiado.

Por ejemplo, el sistema financiero argentino de hoy es pésimo, porque hay pobreza y se cierran las industrias. Y no se cierran sólo las industrias chicas; leemos en los diarios que empresas muy importantes están declinando, cerrando sus puertas, perdidas las convocatorias. Así es como todos los días expulsamos gente a la calle, hombres que son colocados en el campo de la desesperación.

Creo que el espíritu de este proyecto no se inserta en la vocación de la Unión Cívica Radical. No estamos en 1916, cuando el país y el mundo eran otros e Yrigoyen proyectaba una idea social en el escenario argentino. No estamos en 1945, cuando Perón promovía de abajo hacia arriba un criterio con solidaridad social, mejorando las estructuras de funcionamiento del sindicalismo, para mí imprescindible como factor de una transformación permanente de la sociedad; esta es también una responsabilidad de la dirigencia gremial.

Si no estamos ni en el 16 ni en el 45, ¿dónde estamos? En una sociedad que me preocupa porque pareciera que se estuviera formando según el estilo de aquellos príncipes feudales que armaban sus castillos y después trabajaban sobre la propia acumulación.

Hoy se da una especie de aristocracia de la riqueza, de los nuevos ricos. Incluso, muestran sus riquezas. Me preocupa que los espectadores de la riqueza —que se muestra un poco impunemente— son los desocupados, los pobres, las

madres solteras, los chicos de la calle, los jóvenes que quieren estudiar y no pueden.

Nos hubiera gustado mucho más modificar la norma anterior. Dicen que hay que cambiarla por el negocio de los juicios. Pedimos que nos facilitaran los números relacionados con este asunto pero no los conseguimos. Conseguí algunos datos, que no puedo leer porque me queda poco tiempo para terminar con el tratamiento de este tema.

Creo que se podría haber modificado. Es posible que existan algún "juez diablo" y algún obrero que se hizo el enfermo para "jorobar", pero tengo mucho más miedo de que al obrero lo "joroben" las empresas de seguros.

En este momento el trabajador pierde más juicios que los que gana y la proporción de fallos desfavorables va en aumento. Tengo aquí los números para demostrar lo que digo.

El artículo 17 del proyecto de ley dice que los jueces deberán regular los honorarios de todos los profesionales intervinientes, con abstracción de los montos reclamados y en función de los trabajos realizados. Es decir, hay un freno a lo que se está denunciando.

La litigiosidad bajó en proporción más que significativa. En 1991, por la ley 9.688, se iniciaron 18.000 pleitos; en 1994, por aplicación de la ley 24.028, 6.260.

Si decimos que el trabajador no puede ir a la Justicia y solamente se puede afectar al empleador por dolo, qué tendría que hacer la familia de la azafata que murió como consecuencia de haber caído de un avión la semana pasada.

Cuando llegue el momento del tratamiento en particular me parece que habrá que modificar algunos puntos. En base a nuestras propias ideas, nos oponemos a este proyecto de ley, con lo cual somos coherentes con la actuación de los integrantes de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Al respecto, tengo antecedentes de la posición de mi partido, pero ustedes ya los conocen.

En el punto 3 del artículo 4º del proyecto de ley en consideración se dice que mientras el empleador se encuentre ejecutando un posible plan de mejoramiento, no podrá ser sancionado. Y en un proyecto de reforma que me han hecho llegar hoy en el artículo 4º dice que los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad que indicará las medidas y modificaciones que los empleadores deben adoptar en cada uno de sus establecimientos para ade-

cuarlos a la normativa vigente, fijándose 24 meses de plazo para su ejecución. Obsérvese: dos años para que pongan en condiciones un ámbito de trabajo o alguna maquinaria que está produciendo.

Nos parece que las propuestas de reformas de los artículos 24, 36 y 46 y el 50 no hacen al fondo de la cuestión, que a nosotros nos preocupa de manera sustancial.

El artículo 6° contiene una especie de laguna legal al no prever como accidente *itinere* al que suceda entre el lugar del trabajo y el domicilio del trabajador. Todas las leyes referidas a este tema —la 9.688, la 23.643 y la 24.028— lo preveían con la expresión “viceversa”. Esto significaba idas y vueltas.

En una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que asistieron asesores de los ministerios de Trabajo y de Economía y Obras y Servicios Públicos, nos informaron que esto sería una interpretación de lo que surgiese de este debate —lo que ellos llaman interpretación auténtica— y que después habría que corregir en la reglamentación.

Hay otro punto que en alguna medida precariza el contrato de trabajo al establecer que sólo pueden ser consideradas como enfermedades profesionales aquellas que figuren en el listado que anualmente elabore o revise el Poder Ejecutivo. Es decir que cuando el trabajador pueda probar la relación causa-efecto entre las tareas desarrolladas, por las sustancias que manipule o por las condiciones de higiene y seguridad, la enfermedad, si no está en el listado, no será considerada como profesional y por lo tanto no será resarcible. Esto también lo dice la ley.

Puedo dar el ejemplo del tamizado de los trabajadores del tanino en el Chaco. Al respecto, no he podido conseguir demasiado aunque mucho he peleado. Sólo logramos una ley provincial por la que se crea la figura de la insalubridad, pero que desgraciadamente hoy no se cumple.

La denominación que se adopta en el artículo 10 puede ser objetable pues quien sufre incapacidad de manejarse por sí solo no merece esta denominación tan descalificante. Recordemos que es preferible calificar a las personas —si esto fuera posible— por sus capacidades y no por sus incapacidades.

Se ve que este proyecto de ley fue preparado después de la reforma de la ley de jubilación porque habla del AMPO para poner en marcha los resarcimientos.

Obran en mi poder muchos antecedentes, pero me gusta hablar más por lo que siento que por lo que figura en los papeles.

Seguramente algunos senadores de mi bloque también se van a ocupar de este proyecto de ley. Pero yo podría referirme a este equilibrio que está buscando nuestra sociedad mencionando un dato correspondiente al momento en que echaron al entonces presidente Illia. El 48 por ciento de la distribución de los ingresos nacionales iba al sector trabajo y el 52 por ciento restante al sector capital —el señor presidente sabe mucho de esto porque fue ministro de Trabajo—, y ahora nadie nos puede asegurar en qué deformación estamos; algunos dicen que en el 25 y 75 por ciento. Entonces, estamos acumulando de un lado la riqueza y del otro, la miseria. Precisamente el compás que marca esta actitud de la economía internacional que ya está agotando la paciencia de los pueblos, porque está haciendo un tipo de acumulación realmente perversa.

Aquí, por ejemplo, tenemos muchos problemas y yo podría preguntar —porque hace al ordenamiento moral que nosotros pretendemos en el campo social— cómo es posible que sigan abiertos los bancos que no devuelven el dinero a sus clientes...

Sr. Presidente. — Senador León: disculpe que lo interrumpa. Pero quisiera ver la posibilidad de cumplir aquel acuerdo de utilizar la mitad del tiempo reglamentario. De hacerlo, ya se habría agotado el suyo.

Usted tiene derecho de continuar hablando, pero le pediría que redondee su alocución —sin duda es muy importante lo que usted dice— para tener la posibilidad de escuchar a los demás.

Sr. León. — No es que sea importante, pero hay cosas que queremos decir. Igual, haré un gran esfuerzo para terminar en cinco minutos más.

Lamento que el señor presidente me apure porque en mi intento de sintetizar se mezclan todos los antecedentes y no sé para dónde seguir...

Creo que lo mejor es que deje de lado todo lo que tengo pensado, porque quiero realmente apurar mi exposición. Ese es el compromiso que he asumido.

Este proyecto para nosotros contiene también un debate político; no se trata solamente de cuestionar su estructura. Por ello quería referirme a la pequeña pero larga historia del radicalismo con respecto a este tema, pero lo dejaré de lado por el motivo señalado.

De todos modos, pido que se inserte una nota que me mandó la Federación Agraria Argentina...

Sr. Presidente. — Señor senador: las inserciones las puede incorporar hasta mañana a la mañana, porque recién en ese momento las someteré a votación.

Sr. León. — Está bien, pero de todos modos ya la dejo solicitada, casi nunca pido inserciones; incluso, nunca pedí una propia.

Si tomamos en cuenta el momento en que comenzó el orden social en la sociedad de nuestro tiempo hasta hoy, creo que estamos en una situación bastante anárquica. Sobre todo en la cultura sociopolítica dominante actual, porque el hombre está confundiendo mucho los valores éticos con sus horizontes mercantiles.

Entonces, pensamos que este tipo de solidaridades, como las que expresa este proyecto de ley, pueden aparecer frágiles, dando pautas de un capitalismo asfixiante. Se está intentando que este sea nuestro modelo de crecimiento cuando creo que ya hemos hecho la experiencia de probarlo durante cinco años y el país no está creciendo. La industria, por ejemplo, perdió el 15 por ciento de su producción en el mes de julio. Y esto no lo invento yo, sino que son índices confeccionados por el INDEC, instituto que ahora el ministro Cavallo llevó a su área, por lo que nos hace dudar.

Alguien dijo que hay una relación entre el capital y el trabajo; yo digo entre el empleo y los empleadores. Me parece que este es el tema, además de la estructura del proyecto, que nosotros tenemos que enfocar.

Para ser más sintético, el señor miembro informante decía que es necesaria una modernización de la legislación. Con todo el respeto que me merece el señor senador, me parece que este proyecto no moderniza. Porque se supone que hay modernización cuando se camina hacia formas de mayor justicia y de mejor distribución y creo que este proyecto no las fomentará, sino que es una especie de paragolpe elaborado por los hombres del Ministerio de Economía. Además, esta iniciativa no fue muy consultada.

Hubiéramos querido referirnos a la cantidad de juicios en trámite y a la etapa procesal en que se encuentran, tanto en el fuero laboral como en el civil; a la cantidad de sentencias dictadas anualmente; a las sumas efectivamente abonadas por cumplimiento de sentencias de ambos fueros, deslindando las efectivizadas por honorarios profesionales y las abonadas por las compañías de seguros; a la cantidad de causas re-

sueltas en sede administrativa, discriminando los montos por indemnización de los honorarios, costos administrativos por aplicación del sistema vigente; grado de siniestro en las distintas ramas de la actividad empresarial; información actuarial que llevara a determinar las prestaciones dinerarias propuestas; disminución del costo empresario por aplicación del sistema proyectado con respecto a los ocasionados por las leyes 9.688, 23.643 y 24.028.

Habría que hablar del problema que tienen las pymes con esta ley, y habría que hablar de una estructura según la cual se puede preguntar, por ejemplo, de dónde surgirán los fondos para abonar al trabajador con incapacidad permanente total la prestación del pago mensual correspondiente al régimen previsional.

Como ve, señor presidente, estoy saltando de un tema a otro para poder referirme a algunas cosas que pensaba decir. Y ya termino, entonces, para cumplir con mi palabra, aunque no cumplo con mi voluntad de desgranar todo lo posible un proyecto de ley que no va a ser útil.

Nosotros ya aprobamos el proyecto de ley de empleo. Era para mejorar el empleo. Cuando se votó ese proyecto, según las estadísticas, el desempleo llegaba a un 10,8 por ciento. Ahora que rige la ley de empleo, en muchos lugares estamos —por lo menos, según lo que se publicó en los diarios— muy arriba de esa cifra. Rosario y algunas provincias están en el 20 por ciento.

Esto ha llevado al gobierno a tomar medidas. Hemos establecido más impuestos y liberado el aporte de los empresarios. Entonces, me parece que, en algunos aspectos, estamos distribuyendo al revés.

Al mismo tiempo, para conseguir un crédito hay que tener el visto bueno de la DGI, pero ¿quién le da el visto bueno a la DGI? Hay denuncias, que se han publicado en los diarios, referentes a la propia estructura. Es decir, creo que el gobierno tiene que hacer inmediatamente una reestructuración del sistema financiero. Pero como es dependiente del extranjero, es muy difícil que lo haga.

En una palabra, yo quería mezclar el texto de la ley con el pensamiento...

Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. León. — Sí.

Sr. Menem. — No entendí. ¿Qué es lo que es dependiente del extranjero?

Sr. León. — ¿Cómo?

Sr. Menem. — No le entendí qué es lo que es dependiente del extranjero.

Sr. León. — Las preocupaciones que, evidentemente, tienen en Economía para poder cumplir con los compromisos exteriores que, obviamente, son preocupaciones. El ministro ha hablado. Aquí ha habido una inspección del Fondo Monetario. Se ha pedido un *waiver*, o sea el perdón por no cumplir algunas cosas. Y éstas son preocupaciones en el extranjero.

Entonces, nosotros hubiéramos querido —no lo podemos hacer, pero alguna vez hablamos con el señor senador y luchamos por este mismo asunto— una modificación de la política con respecto a la deuda externa. Pero no estamos en condiciones de hacerlo.

Para no entrar en un debate, voy a cerrar esta deshilvanada exposición que no he hecho sólo en nombre de mi partido sino también por una preocupación particular. Entonces ratifico que vamos a votar en contra.

Personalmente, he elaborado un dictamen en la comisión. Podría hablar una hora más ordenadamente. Pero basta decir, en nombre del bloque Radical, que vamos a votar en contra y que algunas de las modificaciones, que muy gentilmente me hizo llegar el señor senador presidente de la comisión, no afectan lo que nosotros creemos que es criticable.

Además, esta política nos ha mostrado que no ha tenido mucho éxito en el campo de la jubilación y creemos que tampoco en el campo del seguro. Ya están apareciendo en los diarios empresas de seguros que dicen querer tomar personal para trabajar en este problema de las aseguradoras del riesgo de trabajo.

Ojalá sirva para conseguir más trabajo, pero por ahora esto no se ha corregido.

Quisiera sí que esto tuviera éxito porque es muy importante. Tengo aquí una información que dice que han bajado los pleitos, pero hay muchos que incluso ejecutados, no han sido pagados. Así que ojalá esto pueda cambiar.

De todos modos el espíritu, la filosofía y la doctrina de esta ley a los radicales no nos convencen. Pido realmente perdón por el deshílvan de mi exposición, pero las circunstancias me han hecho actuar con una velocidad tal que no pude ordenar lo que tenía estructurado.

Considero que ésta es una ley mala porque para el radicalismo, el Estado no puede lavarse las manos en cuestiones sociales. Y yo creo que con esta normativa, el Estado se está lavando las manos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: a esta hora del debate voy a tratar de que mis manifestaciones sean lo más breves posibles, en un tema que sin duda alguna es trascendente. Por lo tanto, en muy pocos minutos voy a referirme a los aspectos generales de este proyecto, solicitando la inserción de los aspectos en particular —que son muy extensos debido a la complejidad del tema—, a los efectos de ser lo más conciso posible.

Por eso quiero decir que el desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales que caracterizaron a nuestro país en estas últimas décadas ha producido consecuencias que nos convocan a reflexionar profundamente sobre los distintos aspectos de la vida laboral en la Argentina, especialmente en lo que se refiere a la legislación de accidentes de trabajo.

Es así que algunas instituciones laborales han sufrido los impactos de tales condicionamientos, sobre todo aquellas que por su trascendencia pública afectan el ámbito de las cuestiones que podríamos indicar como de influencia política.

En este cuadro de situación la legislación en materia de accidentes laborales se ha visto directamente afectada en los últimos tiempos. Dicha institución tiene regulación jurídica positiva en nuestro ordenamiento legal a través de la ley 9.688, modificada por la ley 24.028 en 1991.

El tema que abordamos innova en la problemática que presentan los accidentes y enfermedades del trabajo: la referida a la responsabilidad jurídica que la ocurrencia de éstos plantea respecto de las personas.

También, señor presidente, esta norma resulta novedosa en aquello que se refiere a la prevención de los riesgos laborales, que abarca un marco que a veces excede lo jurídico y que reclama un aporte interdisciplinario, tanto de la medicina de la seguridad e higiene como del derecho del trabajo en sí mismo.

El tema de la prevención de los accidentes y enfermedades ha merecido una insuficiente atención, tanto por parte del empresariado en su conjunto como desde la órbita del Estado. Sin duda, ello revela una falencia, pero no sirve reconocer el error sin tener en mira el claro objetivo de enmendarlo.

Si la ley ha de servir como medio al servicio del desarrollo del hombre, resulta evidente que no sólo nos deben preocupar las consecuencias del hecho dañoso cuando éste ya ha ocurrido,

sino también y fundamentalmente su prevención, a fin de evitar sus consecuencias disvaliosas tanto en el campo de lo material como de lo humano, ya que ellas repercuten en la convivencia social por el deterioro de la persona y de su dignidad.

Es destacable el poco uso que en la práctica se hace de acciones que tiendan a hacer cumplir las normas de seguridad e higiene. La legislación de nuestro país se enroló desde la sanción de la ley 9.688, en 1915, en un régimen que contempla preferentemente la reparación del daño. La posterior reforma efectuada mediante la ley 24.028 tampoco intentó influir en este sentido.

Hoy observo con beneplácito que, a través de este proyecto, se pretende avanzar en esta materia aunque se propone un cambio que, a mi entender, no es el correcto. Esta es una observación que formulo de manera general, como ya lo he manifestado al comienzo de mi exposición, y solicito la inserción del extenso trabajo que he realizado sobre esta cuestión.

Por estas razones, señor presidente, a mi criterio este proyecto se encuentra muy lejos de obtener los resultados propuestos en su artículo 1°. No es conveniente para el trabajador, porque lo limita en sus derechos; no es conveniente para las pequeñas y medianas empresas, porque aumentará sus costos laborales, y seguramente no será conveniente para las aseguradoras de riesgo del trabajo.

En consecuencia, no encuentro fundamentos para apoyar esta iniciativa en la forma en que se la ha impulsado, aunque sí tengo el convencimiento de que en la misma existen elementos que podrían ser útiles debidamente aplicados en un nuevo proyecto.

Teniendo en consideración lo expresado, señor presidente, votaré negativamente en general y en particular el dictamen de comisión sobre el proyecto enviado en revisión por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Gracias por su colaboración, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — No me apure, señor presidente.

Sr. Presidente. — Le agradezco la colaboración al señor senador Romero Feris; la suya también la descuento. (*Risas.*)

Sr. Avelín. — Señor presidente, señores senadores —no hay muchos, pero son importantes—: el proyecto de ley sobre riesgos del trabajo que hoy se debate integra la reforma laboral

que inició el gobierno a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo que lleva el número 24.013, de la Ley de Accidentes de Trabajo número 24.028 y de las leyes número 24.465 y 24.467, modificatorias de la Ley de Contrato de Trabajo.

Todo este proceso de mutación normativa se efectuó con la opinión del *establishment* internacional y local, difundida a su vez generosamente mediante todos los medios de comunicación de masas.

En síntesis: el nuevo apotegma oficial es deformar la legislación laboral para rebajar los costos de producción y crear nuevos puestos de trabajo. Y aquí viene la pregunta: ¿se crearán nuevos puestos de trabajo? ¿Cuántos más?

Hay veinte mil empresas con más de cinco personas que han cerrado sus puertas, y otras ocho mil empresas con menos de cinco personas que también lo han hecho o bajaron sus persianas. Por otro lado, más de veinte mil comercios han cerrado sus puertas en los últimos meses. Y no hablemos del campo argentino y del interior de la República, en donde existen despidos masivos, salarios de hambre y desocupación.

¿Nuevos puestos de trabajo? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Setenta mil familias ven en peligro sus puestos de trabajo en las fábricas de calzado, tres mil obreros metalúrgicos se volcaron a las calles de Río Cuarto y otros tantos en la industria textil prácticamente desaparecida. Y podemos enumerar también a la industria del acero, de la petroquímica, de las aromáticas, de los juguetes —que ya no existen— y miles y miles de actividades industriales con despidos masivos.

Cabe preguntarnos, entonces, cuál fue el resultado de las nuevas normas que han promocionado el empleo temporal o precario. Desde la sanción de aquellas leyes no aumentó la ocupación, sino todo lo contrario: se incrementó, peligrosamente para la paz social, el desempleo.

El año pasado el argumento oficial fue el incremento de la oferta de trabajo, es decir que más gente se incorporaba al mercado laboral. Si bien esta afirmación fue parcialmente cierta, con la última medición quedó ampliamente superada. La contundencia de un índice de desempleo del 18,6 por ciento no permite dudar acerca de que estamos asistiendo a un proceso de expulsión de mano de obra originado en la esencia de la vigente política económica librecambista, agudizada por la actual recesión que el gobierno

deliberadamente provoca por el déficit de la balanza de pagos.

Señor presidente: ¿qué significa librecambista? Anular, deprimir y bloquear el trabajo argentino. Es la apertura total e indiscriminada, subsidiada y con la desleal competencia con el trabajo nacional. Es la política de la desintegración y de la destrucción masiva de las economías regionales y de la industria nacional. La desocupación es el fiel exponente de este tipo de política y de modelo, cuyo objetivo es cumplir con los de afuera a expensas de la desocupación y del hambre de los argentinos.

El gran Kennedy decía el 13 de marzo de 1961, al hablar de la Alianza para el Progreso, que "los hombres y mujeres con hambre no pueden esperar". Repito: los hombres y mujeres con hambre no pueden esperar.

En mayo de 1994 las autoridades no aceptaron el índice del 10,7 por ciento. Luego, en octubre, cuestionaron el que marcaba ya el 12,2 por ciento, cifra que fue calificada por el presidente como "un poco mentirosa", el 30 de enero pasado a su regreso de Davos, Suiza, afirmó también que la cifra real era del 8 o 9 por ciento y que el gobierno estaba haciendo un nuevo relevamiento, según el diario "La Nación" del 22 de julio de 1995.

Llegamos así al 18,6 por ciento, cifra que el jefe de Estado aceptó sin ningún tipo de cuestionamiento.

Quiere decir entonces que se sancionó la Ley Nacional de Empleo para flexibilizar el contrato laboral, con la argumentación de que ello posibilitaría una mayor ocupación de la mano de obra; luego siguieron nuevas reformas y, sin embargo, el desempleo sigue empujándose. La plena ocupación o la ocupación de nuevas fuentes de trabajo fue una ilusión mentirosa para las esperanzas de millones y millones de argentinos, de jóvenes y hombres maduros con carga familiar. Muchos, en largas caravanas, deambulan como parias en su propia tierra. Parias, señor presidente, que vemos recorrer el país en busca de trabajo. Trabajo para dignificar a la vida y al hombre argentino.

Frente a la argumentación recién referida que difunden los economistas y funcionarios del sistema, prefiero el concepto referido por el general Perón el 26 de abril de 1945. Fíjese, señor presidente, qué importante. Y lo menciono a Perón como el líder de ustedes y de muchos argentinos. Ese pensamiento está vigente. Perón dijo que el salario es el punto de partida de todo el ordenamiento económico-social, porque la

salud y el estómago no admiten economías. Nadie debe en estos tiempos —aquellos tiempos y estos tiempos— pretender competir en precios a base de salarios de hambre. La competencia ha de buscarse en el orden interno y en el internacional por la perfección orgánica, la mejor mano de obra, la maquinaria moderna y la nobleza de calidad. (Publicado en *Doctrina Peronista*, página 256, Buenos Aires, 1948).

Los millones, tres millones, y algunos hablan de cuatro millones de argentinos desocupados o subdesocupados esporádicamente se aprietan en el hogar para llorar de desesperación.

Hay que recorrer el interior para contemplar el cuadro paupérrimo de millones de argentinos. El senador Sánchez, que recorre La Rioja, cerca de San Juan; sabe de esta situación.

Días pasados, la prensa recogió manifestaciones del señor vicepresidente de la Nación y presidente de este honorable cuerpo —lo tenemos acá—, quien expresó que los desempleados votaron por el doctor Menem pensando que es el único que les puede arreglar el problema. Apoyo plenamente esa opinión, porque el presidente es el jefe supremo de la Nación y es quien, en definitiva, fija las líneas de acción de gobierno por sobre los ministros y sobre quien recae —en última instancia— la responsabilidad de la gestión y aunque no le interese o no le guste a Cavallo, esto es así.

Por lo tanto, el doctor Menem debe instrumentar cursos efectivos de acción para evitar que el salario de los trabajadores sea la variable de ajuste permanente. Y ello lo logrará si vuelve a las enseñanzas del general Perón. O sea, volver a la raíz, a la fuente; a ese viejo peronismo que levantaba esas grandes banderas de Perón.

Con la visión del estadista y con los ojos puestos en el país y hacia dentro del país. Perón decía: En un mundo convulsionado política e ideológicamente, donde el interés privado prevalece sobre el interés social... y agregaba: en nuestra concepción, el trabajo es un derecho. Y en el momento en que tenemos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal —repito, una concepción liberal— los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. Eso nos decía el tres veces presidente de los argentinos: "el trabajo es un derecho".

Yo agrego que este modelo no lo va a concretar; ilusos los que crean lo contrario. El mundo está lleno de ejemplos y el país los sufre y los ha sufrido en carne propia. Los grandes de la política argentina —Echeverría, Fidel López, Miguel Cané, Carlos Pellegrini, Yrigoyen,

Perón, Frondizi, Illia y muchos otros hombres anónimos — pregaron un proteccionismo selectivo y lucharon por él para que vengan capitales y se invierta a través de un mercado que permita la incorporación de tecnología apropiada para reemplazar métodos obsoletos de nuestra industria.

Perón decía: El crecimiento que termine definitivamente con su concentración en reducidos núcleos o elites que han sido la causa de costosos conflictos sociales. . . Costosos conflictos sociales que observamos en la actualidad: provincias convulsionadas, agobiadas, raquíticas y totalmente marginadas. El mismo Perón agregaba: Cuando se habla de distribución funcional suele predicarse que para favorecer el proceso de crecimiento económico es conveniente remunerar en una mayor proporción al factor capital y empresarial en detrimento del trabajo. . . Aun cuando esto técnicamente pudiera tener visos de realidad es socialmente injusto y, por lo tanto, debe desecharse de nuestra doctrina nacional. Repito: socialmente injusto. Y doctrina nacional que debe estar por encima de todo partidismo, de toda influencia sectorial y de todo apriete que provoque convulsiones sociales, como desgraciadamente observamos a lo largo y ancho del país.

¡Nadie podrá levantar al país con el hambre de nuestro pueblo! El desempleo, funcional al modelo, presiona sobre el salario no obstante la legislación patrocinada por el propio gobierno.

Veamos ahora el otro aspecto que lo complementa y que es el proyecto que hoy se debate. Se denomina ley sobre riesgos del trabajo. Si existen riesgos, obvio es resaltar la dimensión que debe alcanzar su prevención. Como médico, destacaré las falencias que en esta materia contiene el proyecto, para luego mencionar las críticas esenciales que formula la doctrina jurídica especializada y que yo comparto.

Prevención de los riesgos laborales. No puede existir una adecuada prevención de los riesgos del trabajo si, previamente, no se cumple con las normas de higiene y seguridad y si tampoco existe información y estadísticas completas y serias sobre causas y orígenes de la pérdida de la capacidad laborativa: montos anuales abonados en concepto de enfermedades o accidentes o no percibidos por insolvencia de los empleadores; estado de higiene y seguridad del trabajo; asistencia médico-farmacéutica, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación profesional; resultados económicos para empleadores y trabajadores de la ley 24.028, que reformó la anterior legislación de accidentes de trabajo.

La carencia de toda esa información, así como el escaso cumplimiento y control de las normas sobre higiene y seguridad laboral, hacen que el proyecto en debate instrumente una insuficiente prevención de los riesgos.

En efecto, el capítulo II del proyecto, referido a esta cuestión de la prevención, determina como obligación de las partes asumir compromisos concretos de cumplir con las normas de seguridad e higiene. Los contratos entre una aseguradora de riesgos del trabajo y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de dichas condiciones.

Las pautas referidas crean un sistema que mediatiza la acción del Estado prevista por la legislación de policía del trabajo, puesto que son las aseguradoras de riesgos del trabajo las nuevas figuras predominantes. Se trata de verdaderas normas híbridas que poco o nada definen.

Por ejemplo, ellas controlarán el plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad y denunciarán los incumplimientos al organismo público a crearse.

También se aprecia una disminución del deber de seguridad en la modificación del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que elimina la frase que obliga al empleador a "adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores".

La dignidad de los trabajadores. . . Los que tienen salarios magros e insuficientes, los que viven muchas veces marginados, empobrecidos y con la desesperación de soportar la dureza de la vida o el capricho de soportar la mezquina retribución en negro sin tener la perspectiva de una raquítica obra social, algunas en vías de ser desmanteladas y otras totalmente destruidas. Y al ser desmanteladas o destruidas las obras sociales muchos obreros, empleados y sectores de la población no tendrán donde atenderse.

La doctrina especializada formuló fundamentadas críticas que descalifican al proyecto y que, brevemente, sintetizaré. En primer término, cabe afirmar que el nuevo sistema incluye los riesgos laborales y la reparación de los daños emergentes de los accidentes de trabajo en el ámbito de la seguridad social, que en nuestro país ya de por sí es precaria, por no decir inexistente.

Las "aseguradoras de riesgos del trabajo" serán los sujetos verdaderamente beneficiados del régimen, puesto que tendrán un inmenso mercado cautivo conformado por los trabaja-

dores en relación de dependencia del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal, a los que se sumarán —como se prevé— los trabajadores autónomos, los domésticos y hasta los bomberos voluntarios. ¡Menos mal que hay pocos bomberos voluntarios!

La masa de aportes que recibirán y la disminución sustancial de los montos de reparaciones al trabajador o sus derechohabientes concretarán un negocio exitoso por su escaso riesgo y por su segura tasa de ganancia.

Harán su agosto, aumentarán su capital y sucionarán el dinero de millones y millones de obreros argentinos. Hasta cuándo, señor presidente, se marginarán responsabilidades que deben ser y constituir eslabones infranqueables entre el empresario y sus obreros y obreros y empresarios, en el mutuo compromiso de asegurar la vida, el trabajo y el progreso de la empresa, sin descuidar ni derivar a terceros el riesgo del trabajador que, en definitiva, es el que elabora la riqueza de la empresa y del país; el país de todos los argentinos. Como dijo Perón, los obreros son la columna que elabora la grandeza de la patria.

Se subvierten los principios de la teoría general del derecho porque el empleador, responsable del accidente o de la enfermedad en virtud del riesgo creado, será excluido de la responsabilidad, la que recaerá en la Seguridad Social. Es decir, se socializa la culpa. Es una marginación inapropiada por cuanto exime al empleador.

Se transgrede la garantía constitucional de igualdad ante la ley, haciendo de los trabajadores ciudadanos de segunda clase, en razón de que serán excluidos de la reparación integral prevista por el Código Civil. El Código es una garantía que puede restituir sus legítimos derechos.

O sea que el trabajador será privado de dicha reparación. Mientras que la persona que no trabaja en la empresa, y sufre similar accidente, tendrá siempre derecho al resarcimiento del Código Civil.

Según el artículo 6°, inciso 2°, las incapacidades derivadas de enfermedades contraídas a causa del trabajo sólo se indemnizarán si la enfermedad estuviere mencionada en el listado que "elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente", resultando inconveniente que el listado no tenga carácter enunciativo, porque en definitiva será una desventaja para el trabajador.

Esto traerá dudas, incertidumbres y formas caprichosas para interpretar las decenas de patologías, de secuelas, de incapacidades físicas,

metabólicas o traumas psíquicos en el devenir de su propia existencia.

Nada más penoso que ver deambular a quienes sufrieron traumas que los incapacitan para sus tareas habituales. Este es un capítulo que merece un estudio profundo, exhaustivo y con profesionales de larga experiencia médica, jurídica y social.

El profesor Antonio Navarro, un gran clínico que fue orgullo en todo el país, clasificaba las enfermedades. Dijo el profesor Navarro: "No existe una clasificación de las enfermedades sino varias. Según los fundamentos o el criterio que para ello se tenga, es decir el concepto filosófico-biológico y características más relevantes de la enfermedad, base de la Taxonomía, capítulo de la Nosología que se ocupa de la clasificación de las enfermedades".

Y agregaba: "El conocimiento de todas las clasificaciones es necesario para la más exacta y apropiada formulación del diagnóstico y pronóstico, desde la clasificación naturista clásica de Sydenham, con su *Species Morboese* hasta la etiología científica actual".

Las principales, desde el punto de vista práctico, son las que se basan en la duración y marcha; en su etiología —la etiología se refiere a la búsqueda de la causa, del principio—; en su evolución y éxito. Pueden ser: agudas, subagudas, crónicas, hereditarias, congénitas, familiares, constitucionales, tóxicas, químicas, traumáticas, físicas, psíquicas, mentales, y, entre ellas, curables, incurables, recidivantes, secueles, latentes, inmunizantes, sensibilizantes o alergizantes, letales, etcétera.

Fíjense, ustedes, el sinnúmero de enfermedades, de patologías, de etiologías o causas que pueden producir enfermedades. Asimismo, el pronóstico puede ser totalmente incierto y mal analizado.

Todos estos cuadros plantean interrogantes, dudas, incertidumbres, así como también el peligro constante de equivocarse el pronóstico y llevar un camino sin salida a quien o quienes sufran cuadros clínicos de diferentes patologías.

Esto es poco claro, en lo que se refiere a la responsabilidad en materia penal en caso de enfermedad o accidentes. No se establece claramente cuál es la conducta penal que se sanciona; quién responde en esa materia y cuáles son los deberes que se deben cumplir para habilitar las acciones penales. Pierde sentido el principio que establece que "no hay pena sin delito previamente tipificado". Al no estar el delito clara-

mente establecido, no se pena a nadie porque no está definido con exactitud.

Para concluir, quiero mencionar un estudio realizado por la Comisión de Seguridad e Higiene de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, en el que se observan en el caso puntual de la empresa METCON los efectos de las modificaciones laborales en materia de flexibilización y que, sin duda, se acentuarán de aprobarse el proyecto que se debate.

En el caso citado, la cantidad de operarios es de 607; los contratos por tiempo indeterminado, 76,5 por ciento; los contratos por tiempo determinado —flexibilización—, 23,5 por ciento.

Si se considera el mes de junio de 1992, los que tienen contrato por tiempo indeterminado, se accidentan el 1,075 por ciento mensual y los que tienen contrato por tiempo determinado, 5,6 por ciento mensual.

En septiembre de 1992, los que tienen contrato por tiempo indeterminado —o sea, en forma indefinida—, se accidentan el 0,65 por ciento mensual, y los que tienen contrato por tiempo determinado, 6,3 por ciento mensual.

Se comprobó así que el contrato precario —es decir, el determinado— genera una tendencia mayor al accidente y, a la vez, se denuncian menos accidentes. Debemos preguntarnos por qué se dan esos efectos.

Las organizaciones del trabajo manifiestan que en el empleo precario el obrero pierde especialización y por ello se expone con mayor intensidad al accidente. Por otro lado, para permanecer en el puesto, se ocultan los accidentes.

El miedo del obrero argentino es perder el trabajo. El miedo los hace esclavos de muchos caprichos. El miedo los hace aceptar en negro el magro salario. Por ello aguantan, sufren y con el sufrimiento y el dolor en el alma consiguen llevar el pan para el hogar, la familia y los hijos.

Si este discurso lo hubiera dicho en tiempos de Perón hubiera tenido muchos aplausos.

Señor presidente, señores senadores: este proyecto no cuenta con las opiniones de las organizaciones empresariales ni tampoco con todos los sectores del movimiento obrero. Por ejemplo, en lo relativo al régimen financiero, cotización, alcónotas, etcétera, del artículo 23 y sucesivos del proyecto, no se consultó a los especialistas en seguro ni se tuvieron en cuenta las bases de información empírica y estadística de esta actividad. No se ha consultado a los médicos especialistas en higiene y seguridad del trabajo ni a los colegios de abogados, entre ellos la Asoc-

ciación de Abogados Laboristas de la Capital Federal. Podrán tener sus intereses, pero habría que consultarlos.

Un tema de tanta importancia debe ser analizado en profundidad con expresa participación de todos los sectores mencionados.

Termino, señor presidente, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, con algo que me impactó en toda mi vida política, al leer y releer el capítulo décimo de las veinte verdades del Partido Justicialista, que dice textualmente: "Los dos brazos del justicialismo son la justicia social y la ayuda social... con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor".

No vaya a resultar que con esta ley que hoy se discute ocurra todo lo contrario... El abrazo del gorila para oprimir a los obreros de la patria.

De ahí mi negativa para apoyar este proyecto de ley.

Sr. Sánchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Primero corresponde que haga uso de la palabra el señor senador Villarroel. Si él le concede la interrupción...

Sr. Sánchez. — Es para una breve interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. — Le solicito que la interrupción sea corta, de lo contrario deberemos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Sánchez. — Si bien es cierto que se ha votado pasar a cuarto intermedio a partir de las 23 no es menos cierto que la situación que estamos viviendo en este momento orilla la falta de respeto. Porque puedo dominar un tema, pero aun así tengo la obligación de escuchar para poder rebatir o para coincidir.

No se puede sentir bien quien está hablando solo cuando hay más de cuarenta senadores que integran este cuerpo y la Presidencia no puede seguir poniendo la cara para escuchar.

De manera que propongo concretamente, si es que existe un resquicio legal por donde caminar, que pasemos a cuarto intermedio hasta mañana.

Sr. Presidente. — La única posibilidad de que esto ocurra es que el senador Villarroel no estuviera en el recinto, que es el único orador anotado. Pero si está en el recinto tengo que concederle el uso de la palabra.

Sr. Sánchez. — Queda un camino, que se vaya. *(Risas.)*

Sr. Presidente. — Yo me voy a a quedar para escuchar.

Sr. Villarroel. — Estoy en condiciones de decir, como cierto comunicador famoso: "No me dejen solo" en esta sesión que evidentemente se parece más a una función de traspase, para colmo condicionada, por el escaso número de los asistentes.

No me quejo demasiado porque no asumo que por mi parte, en cumplimiento de mis obligaciones, como bien ha dicho el senador por La Rioja, escuchar las opiniones ajenas esté condicionado al deber de reciprocidad.

Yo permanezco, escucho y no importa que deba hablar ante una concurrencia tan escasa. De todas maneras quienes están merecen ampliamente que corresponda a su gentileza exponiendo brevemente lo que debo decir en general respecto de este proyecto de ley.

Desde luego, correspondiendo a la gentileza de quienes permanecen en la sesión y a la paciencia del señor presidente, me voy a abstener de pronunciar un largo discurso. Simplemente voy a limitarme a referir de modo muy sintético las principales observaciones que me merece esta iniciativa, dejando también expresa constancia de que de alguna manera cumplo un encargo que me formulara en su momento el señor senador por Córdoba, doctor Cendoya, con quien habíamos intercambiado puntos de vista sobre este asunto y quien dejó algunos apuntes que utilizaré parcialmente para esta tarea que será breve, lo prometo.

En primer lugar, la objeción —por mucho que esté dévaluado el sentido de respeto constitucional— versa sobre el desajuste, a nuestro criterio, del proyecto de ley con la Constitución Nacional. Un senador que representa a su provincia debe decir esto: se afectan las autonomías provinciales; se afectan los artículos 121, 122, 5º y los concordantes de la Constitución Nacional, toda vez que se incluye en el ámbito del proyecto a los empleados públicos de las provincias y municipios. Con esto se olvida entre otras cosas que el régimen de la función pública es típico y esencial del derecho administrativo, que por definición es local.

La relación de empleo público es un contrato administrativo; por lo tanto, no puede ser regido por normas dictadas en el orden nacional, salvo que las provincias las asuman mediante adopción o recenvío, que es cosa muy distinta de lo que figura en el artículo 2º. De manera que ésta es la primera objeción en cuanto a la inconstitucionalidad de la iniciativa.

La segunda también está en este orden de ideas. Se encomienda la policía del trabajo a ór-

ganos que son, en rigor, privados. Se incurre en una delegación de la Nación a estos órganos privados, a estas comisiones médicas. Se desconoce aquí otro factor de la autonomía provincial, cual es la potestad de policía del trabajo que, sin duda, también les asiste a las provincias y aparece desplazada en este proyecto de ley.

En tercer lugar y en el mismo andarivel de las inconstitucionalidades del proyecto, está el hecho de que contra la norma expresa del inciso 12 del artículo 75 de la actual Constitución Nacional se establece la jurisdicción federal, pese a que la norma constitucional de cita establece que todas las leyes que allí se mencionan, incluidas las laborales —y esta lo es—, corresponden a la jurisdicción de los jueces de la Nación o a los jueces de provincia, según que las cosas o las personas correspondan a las respectivas jurisdicciones. No se ve por qué deben ser jueces federales los que entiendan en la aplicación del derecho contenido en esta norma.

Otra observación que ya no hace al tema de la constitucionalidad sino al de la técnica legislativa y al del sentido de la ley es que no resulta conveniente, como lo hace el proyecto de ley, reunir en la misma categoría de órganos —las célebres comisiones médicas— lo que atañe a la prevención de los accidentes y enfermedades y lo relacionado con su reparación. Para colmo, se delega en estos órganos la policía de seguridad del trabajo. No es conveniente con mayor razón si se advierte que estos órganos carecen en realidad de dos datos que me parecen fundamentales para el ejercicio adecuado del poder de policía. Estos son: por un lado, la independencia y, por otro, una situación de neutralidad frente a cada caso que se plantee. Ninguno de ambos requisitos se da en estas comisiones médicas en las que virtualmente se delega un poder de policía.

Por lo demás, la obligación de prevención, que ya ha quedado bastante reducida con la derogación del artículo 75 de la ley de accidentes de trabajo vigente, virtualmente se ha convertido en algo irrelevante según el texto del artículo 4º del proyecto de ley.

Veo con satisfacción que hay una propuesta del bloque mayoritario de modificar la redacción de este artículo en un sentido que lo mejoraría en alguna medida, pero de todas maneras me parece que aun con esa eventual reforma en particular la norma será insuficiente para el cumplimiento del objetivo que debería tener.

Otro aspecto que ya hace directamente a la defensa de los derechos del trabajador es el procedimiento administrativo —las dos instancias

administrativas y la ulterior instancia ante la Cámara Federal que está situada en la Capital Federal. Por circunstancias que todos conocemos, sobre todo los legisladores que representamos a las provincias del interior del país, esa serie de circunstancias, concatenadas con las necesidades de concurrir a la Capital de la República a sostener en última instancia el recurso judicial significa, si no una virtual denegación de justicia sí, por lo menos, obstáculos que en muchos casos serán insalvables para garantizar el derecho de acceso a la misma. Además, desde este punto de vista, se comprometerá más allá de lo tolerable la garantía de la defensa en juicio, que no debería tener menoscabo.

Voy a poner como ejemplo el caso de algún trabajador del interior de mi provincia que deba venir a esta ciudad a litigar ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Según el proyecto de ley todas las gestiones serán gratuitas, pero en ninguna parte se dice quién va a costear el viaje y la estadía o la pensión de dicho trabajador.

Analizando a fondo el proyecto de ley, sin duda el punto más sensible es el que circunscribe la viabilidad de la acción civil resarcitoria exclusivamente al caso de que se alegue y se pruebe naturalmente dolo del patrón, vale decir delito en concreto, como conducta causante del daño resarcible.

Para peor, esta norma se concatena con otra que mediante la derogación parcial del artículo 75 de la ley de accidentes del trabajo vigente excluye de las obligaciones contractuales del patrón, como bien ha dicho el señor senador por San Juan, las obligaciones relativas a la seguridad, la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador. Esto deja de ser una obligación contractual, de manera que no hay forma de buscar una responsabilidad civil por ese lado en orden al incumplimiento contractual, y la responsabilidad extracontractual queda limitada al caso de delito.

La pregunta es cuál es el motivo para que un trabajador no tenga el derecho que tiene cualquier habitante de la Nación, de acuerdo con la Constitución y las leyes que rigen este país, de obtener una verdadera indemnización.

No voy a venir a explicar en este recinto que indemnización quiere decir exactamente, según su etimología, "sin daño". ¿Por qué mientras cualquier habitante, ante un hecho dañoso ilícito que lo perjudica, tiene perfecto derecho a ser indemnizado —vale decir a resultar sin daño de esta situación—, el trabajador no tiene ese de-

recho o mejor dicho se lo acota hasta el límite de una tarifa?

Eso es claramente violatorio de otra norma constitucional, la del artículo 16 de la Carta Magna y está soslayado en los fundamentos del proyecto.

No se aborda esta cuestión. Insisto: resulta que todo habitante de la Nación tiene derecho a la indemnización —vale decir, a la reparación plena e integral de los daños materiales y morales que sufre—; en cambio el trabajador, no. El trabajador tiene un techo, una tarifa —ya se dijo hace un rato; y en los medios de comunicación se ha utilizado el infortunado ejemplo de la azafata—. Y bueno; el caso típico.

Lo mismo puede ocurrir con algún transeúnte desprevenido al que se le caiga encima un ladrillo de una obra en construcción; él sí tiene derecho a la reparación integral, pero el obrero que trabaja en la construcción no lo tendrá. Verá exactamente acotados sus derechos hasta ese límite —en el mejor de los casos para él— que fije el proyecto de ley.

Se acentúa esta desigualdad violatoria de normas constitucionales en la medida en que el proyecto de ley tampoco contiene una indemnización diferenciada para el caso de muerte del trabajador.

Al analizar el proyecto, se observa que en los casos de muerte la indemnización es exactamente la misma que para el de incapacidad total y permanente. De alguna manera, no sólo es una injusticia sino que también constituye una falta de respeto.

El régimen penal que se adosa a este proyecto de ley también merece objeciones no sólo por su muy deficiente técnica. La técnica penal, para ser congruente con los principios constitucionales, exige que las figuras sean precisamente descriptas; y este no es el caso sino que, de alguna manera, también parece reinstaurar las prisión por deudas. Así, contraviene en este caso concreto no sólo un principio tradicional de nuestro derecho positivo argentino sino también una norma expresa del Pacto de San José de Costa Rica —si mal no recuerdo, se trata del artículo 7º; y ahorro la lectura de la cita porque no quiero alargar esta exposición—.

Hay otro aspecto sumamente cuestionable que ojalá sea corregido, por lo menos, en parte.

Creo que de las normas que se citan como eventualmente modificables en esta instancia por el Senado está la que se refiere a este asunto y consiste en la excesiva delegación de facultades que hace el Congreso. Por una parte, en la ART

y por otra, en el mismo Poder Ejecutivo. Lo primero, respecto del poder de policía —prevención de los riesgos, etcétera—; lo segundo —las delegaciones al Ejecutivo—, en la normativa sobre ciertas situaciones como la del pluriempleo, trabajadores jubilados que vuelven al servicio, etcétera, que también se delega en el Poder Ejecutivo.

Son aspectos muy importantes que no se deberían deferir al órgano ejecutivo sino que deberían ser reglados precisamente por el Congreso porque ésa es su función.

Creo —con esto ya estoy concluyendo—, y compartiendo el sentido de las expresiones de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, que en esto subyace una ideología, no una filosofía. Y tal vez la convicción reciente, me parece, en algún sector político de que el dejar hacer y el dejar pasar son una garantía suficiente, como si dijéramos que la concurrencia y el conflicto de los egoísmos producen automáticamente las solidaridad y la justicia.

Hay un cierto fundamentalismo liberal que está en el fondo de esta manera de legislar.

Creo, por el contrario, que la democracia —que consiste básicamente en tener presente al otro; en portarse con justicia con el otro; en ser solidario con el otro; en compartir con el otro— no se puede fundar en el juego libre de los egoísmos y sus resultados, ni tampoco puede depender del mayor o menor aporte productivo o económico que haga el otro. Tiene que haber

una base de solidaridad, una base de justicia, una voluntad conscientemente dirigida al Estado. Y eso no es otra cosa que política, para que se hagan repartos justos.

Este proyecto de ley parte de una ideología distinta. No es un proyecto democrático en ese sentido.

Quiero recoger algunas reflexiones que recientemente he leído en un artículo periodístico y también en un libro de mucha circulación en estos días, de Alain Touraine. En ellos se reivindica este aspecto del voluntarismo de las democracias contra esta presunta panacea de la concurrencia de los egoísmos individuales. Me parece que por ese lado, este proyecto también renquea, porque en definitiva una vez más —ya se está casi haciendo una norma, lamentablemente— viene a descargar los sacrificios, las necesidades de caja, los ajustes y todas las situaciones parecidas en los que están más abajo, en los que tienen mayores necesidades, en los que más necesitan de la solidaridad y del sentido de justicia.

Estas son, señor presidente y señores senadores, las razones que me llevan a oponerme a este proyecto de ley.

Sr. Presidente. —En virtud de lo dispuesto por la Cámara, se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

—Son las 22 y 52.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

42

APENDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Homenaje a Juan Manuel Fangio

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 3457.

2

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 3524.

3

Juez Federal de Primera Instancia de San Nicolás, Buenos Aires

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 3524.

4

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 3525.

5

Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 3525.

6

Juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 3526.